



Boletín No 21: Serie sobre los derechos de las víctimas y la aplicación de la ley 975*

Las recientes elecciones locales evidencian que el paramilitarismo está vivo en Colombia

El pasado 28 de octubre de 2007 tuvieron lugar las elecciones para alcaldes, gobernadores, diputados, concejales y juntas administradoras locales. La realización y los resultados de estas elecciones despertaron especial interés tanto a nivel nacional como internacional, pues cerca de 45 congresistas de 16 departamentos del país están siendo investigados por la Corte Suprema de Justicia y por la Fiscalía General de la Nación por sus presuntos nexos con grupos paramilitares. Esto, sumado a la supuesta desmovilización de cerca de 31.000 paramilitares, hizo que las expectativas sobre estas elecciones fueran mayores que en otras oportunidades. Quizás la mayor expectativa consista en saber, con base en sus resultados si, como lo afirma el gobierno, ha habido un desmantelamiento del paramilitarismo¹, entendido este no sólo como una estructura militar, sino también como una estructura económica y política o si, por el contrario, estas estructuras continúan ejerciendo su poder en el país.

27.000 candidatos avalados por partidos vinculados a paramilitares

Las investigaciones contra diversos políticos por sus presuntos nexos con grupos paramilitares y la revelación de las alianzas que hicieron políticos del orden nacional y del orden local con estos grupos causaron impacto en la opinión pública. Sin embargo, este impacto no se vio reflejado en la implementación de mecanismos tendientes a superar esta situación, pues si bien se ha emprendido una labor de esclarecimiento por la Corte Suprema de Justicia y por la Fiscalía, estos esfuerzos parecen diluirse si el Gobierno no pone en funcionamiento estrategias para desmantelar la estrecha relación de importantes políticos con grupos paramilitares.

Lo anterior quedó en evidencia en las pasadas elecciones, en las que cinco de los partidos políticos cuyos miembros están siendo investigados por sus nexos con grupos paramilitares extendieron avales a aproximadamente 27.000 candidatos, de 86.000 que estaban inscritos². Así mismo, los políticos investigados por presuntos nexos con los paramilitares siguieron haciendo política desde sus sitios de reclusión, lo cual demuestra que muchos de ellos continuaron ejerciendo un poder enorme en sus regiones de influencia y que las estructuras políticas de los paramilitares se mantienen intactas.

En efecto, los partidos políticos presuntamente involucrados con grupos paramilitares, como Colombia Viva, Colombia Democrática, Apertura Liberal, Convergencia Ciudadana y Alas-Equipo Colombia, extendieron avales a miles de candidatos sin que hubiera mecanismos para impedirlo. Por ejemplo, el partido político Colombia Viva, fundado por Dieb Maloof, congresista del Atlántico

* La presente publicación ha sido elaborada con el auspicio de la Unión Europea y el gobierno de Canadá y el contenido de la misma es responsabilidad exclusiva de la Comisión Colombiana de Juristas. En ningún caso debe considerarse que refleja los puntos de vista de la Unión Europea ni del gobierno de Canadá.

¹ Ver, entre otras, las palabras del Presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, el 20 de julio de 2007 en la ceremonia de instalación del Congreso de la República. Consultar en: <http://web.presidencia.gov.co.sne>

² Claudia López, “¡Peligro! No escoja candidatos de alto riesgo para la democracia”, 26 de octubre de 2007, consultado en: www.semana.com

que se encuentra detenido por supuestos nexos con el jefe paramilitar alias “Jorge 40”, pretendía ganar seis gobernaciones, ocho alcaldías de ciudades capitales y 3.437 curules en concejos, asambleas y alcaldías locales, para un total de 3.551 avales³.

Así mismo, Convergencia Ciudadana, fundado por el congresista Luis Alberto Gil, llamado a indagatoria por nexos con el paramilitarismo, extendió avales para cuatro gobernaciones, 11 alcaldías a ciudades capitales y 6.588 curules en las demás corporaciones. Por su parte, el partido Colombia Democrática, fundado por el Presidente de la República, y también implicado gravemente en paramilitarismo, extendió 5.338 avales para las elecciones, entre los que se contaban cuatro gobernaciones. Este partido político tiene involucrados en los procesos de investigación por nexos con el paramilitarismo a uno de sus fundadores, el senador Mario Uribe, primo del Presidente, y a los congresistas Miguel de la Espriella y Álvaro García Romero, quienes se encuentran detenidos⁴.

Por su parte, Apertura Liberal, partido político que tiene investigado al representante a la Cámara Jorge Luis Caballero por concierto para delinquir y fraude procesal, otorgó 4.682 avales para asambleas y concejos, 10 para gobernaciones y seis para alcaldías de ciudades capitales. Por último, Alas-Equipo Colombia, que tiene en la cárcel a uno de sus fundadores -el senador Álvaro Araujo Castro-, extendió 6.356 avales para las elecciones de octubre⁵.

Las anteriores cifras por sí solas son suficientes para concluir que las autoridades no tomaron ninguna medida conducente a impedir que el paramilitarismo nuevamente se apoderara del poder político local, y son muestra de que el paramilitarismo continúa con su estrategia de infiltración en el poder político local y regional. Pese a que estos cinco partidos tienen serios cuestionamientos sobre la legitimidad de la elección de sus miembros en sufragios pasados, pudieron, sin ningún obstáculo, avalar candidatos para las elecciones de octubre y continuar actuando en política sin recibir consecuencias por las investigaciones a las que están siendo sometidos muchos de sus miembros.

Políticos elegidos con apoyo de parlamentarios investigados por paramilitarismo

Algunos de los candidatos son duramente cuestionados no sólo por tener el aval de partidos políticos involucrados en las investigaciones por nexos con paramilitares, sino porque, además, contra ellos mismos hay acusaciones directas de tener vínculos con paramilitares o, por lo menos, con los políticos que actualmente están siendo investigados por nexos con estos grupos.

Varios son los candidatos de quienes se dijo que estarían apoyados directamente por políticos investigados por sus presuntos nexos con grupos paramilitares. Por ejemplo, los senadores Álvaro García y Jairo Merlano, ambos detenidos por la investigación de la “parapolítica”, apoyaron la candidatura a la alcaldía de Sincelejo (Sucre) de Jesús Paternina Samur y la candidatura a la Gobernación por el mismo departamento de Jorge Carlos Barraza Farak⁶. Por su parte, la candidatura a la gobernación de Córdoba de Martha Sáenz estaba apoyada por los congresistas Juan Manuel López Cabrales y Reginaldo Montes, también detenidos⁷.

³ Diario *El Tiempo*, “Partidos heridos por la parapolítica van en busca de 16 gobernaciones”, 21 de octubre de 2007, pág. 14-15.

⁴ *Ibíd.*

⁵ *Ibíd.*

⁶ *El Espectador*, “Mapa electoral de la costa”, 2 de septiembre de 2007, pág. 4-A.

⁷ *Ibíd.*

Así mismo, la candidatura a la gobernación del Cesar de Arturo Rafael Calderón Rivadeneira, ex secretario de salud de la administración de la gobernación de Hernando Molina, fue cuestionada por los apoyos que recibió desde la cárcel de La Picota. Por una parte, el senador detenido Álvaro Araújo Castro, desde el centro de reclusión y a través de la emisora Radio Guatapurí, de propiedad de su familia, “invitó” a los electores a votar por él⁸. El candidato a su vez contó con el respaldo de Hernando Molina, ex gobernador del Magdalena, hoy detenido por presuntos nexos con el paramilitar alias “Jorge 40”, quien habría llevado a Hernando Molina a ganar la gobernación en el 2003 luego de que, por amenazas, hicieran renunciar a Cristian Hernando Moreno a su candidatura⁹. Álvaro Araújo también estaría apoyando la candidatura de David Andrade a la alcaldía de Bosconia (Cesar), pues el propio candidato estuvo visitando en la cárcel al senador para pedirle su respaldo político¹⁰.

A la candidatura de Omar Díazgranados a la gobernación del Magdalena también se le hicieron cuestionamientos. Este candidato fue secretario de Trino Luna, ex gobernador del Magdalena, quien se encuentra detenido por sus presuntos nexos con paramilitares. El candidato contó con el apoyo del ex gobernador, y además con el aval del ex representante Alfonso Campo y del senador Luis Eduardo Vives. Estos últimos también se encuentran detenidos en la cárcel de La Picota por sus presuntos nexos con grupos paramilitares¹¹.

Por su parte, el senador Dieb Maloof, detenido por sus presuntos nexos con el paramilitarismo, avaló la candidatura al Concejo de Bogotá de Liliana Támara, quien fue su asesora en el Congreso. El nombre de Liliana Támara aparece involucrado en un soborno de tres mil millones de pesos que el senador hizo presuntamente para que no cerraran una “empresa promotora de salud” (EPS)¹².

Además de los respaldos políticos que los congresistas investigados dieron a muchos de los candidatos postulados a las elecciones de octubre, algunos paramilitares acogidos al procedimiento especial de la ley 975 de 2005 que se encuentran actualmente rindiendo versión libre han señalado a algunos de los candidatos a las pasadas elecciones como miembros de la estructura paramilitar. Así ocurrió el pasado 29 de octubre de 2007, cuando el paramilitar Ever Veloza, alias “HH”, mencionó en audiencia de versión libre celebrada un día después de la jornada electoral, cuando ya se conocían los resultados, que Arnulfo Peñuela, candidato electo para la alcaldía de Carepa (Antioquia) dirigió la convivor “Papagayo”, creada por Raúl Hazbún, un reconocido paramilitar del Urabá, por medio de la cual las empresas bananeras de la región hacían sus “aportes” al paramilitarismo¹³.

Victorias nada desdeñables de candidatos relacionados con paramilitares

Los anteriores son apenas ejemplos del control político que los paramilitares y su estructura política tienen en muchas regiones del país, pues la contienda electoral de octubre pasado demostró que las campañas electorales siguen funcionando a la manera tradicional y que en materia de política pocas cosas han cambiado. La sola postulación que pudieron hacer los candidatos avalados por los

⁸ Diario *El Tiempo*, “Desde prisión, ex senador Araújo impulsa campaña”, 7 de agosto de 2007, pág. 1-4.

⁹ Diario *El Tiempo*, “Sombra ‘parapolítica’ en campaña del Cesar”, 22 de octubre de 2007, versión electrónica.

¹⁰ Diario *El Tiempo*, “Blindar elecciones: ¿imposible?”, 20 de mayo de 2007, pág. 1-5.

¹¹ *El Espectador*, “Mapa electoral de la costa”, 2 de septiembre de 2007, pág. 4-A.

¹² Diario *El Tiempo*, “Partidos heridos por la parapolítica van en busca de 16 gobernaciones”, 21 de octubre de 2007, pág. 14-15.

¹³ Diario *El Tiempo*, “Trece elegidos con líos con la justicia”, 30 de octubre de 2007, pág. 1-4. Las “Convivir”, también conocidas como “cooperativas de seguridad rural”, eran asociaciones a las que el decreto-ley 356 de 1994 les permitía utilizar armas de guerra. La norma que así lo disponía (el parágrafo del artículo 39) fue declarada inconstitucional por la Corte Constitucional en noviembre de 1997 (sentencia C-572/07). Las “Convivir” fueron utilizadas de manera intensa para el desarrollo del paramilitarismo.

partidos políticos cuyos miembros están siendo investigados no son sino una muestra de que el paramilitarismo no se ha acabado, a diferencia de lo que anuncia el Gobierno nacional, pues, como se mencionó anteriormente, las estructuras paramilitares consisten en mucho más que unas estructuras armadas. Si no se desmantela el poder que varios políticos forjaron durante años junto con jefes paramilitares para apoderarse de los recursos de las regiones y favorecer sus intereses particulares, difícilmente se podrá afirmar que el paramilitarismo ya no existe, e igualmente será difícil pensar que en un futuro cercano el país tendrá unas elecciones transparentes alejadas de la influencia paramilitar.

¿Qué ocurrió entonces con los resultados de las elecciones del 28 de octubre? Los resultados indican que si bien algunos políticos apoyados por el paramilitarismo no accedieron a las curules¹⁴, otros sí lo hicieron y que, incluso, los partidos políticos cuyos miembros están siendo investigados por sus nexos con el paramilitarismo no perdieron poder, sino que se “reacomodaron” a lo largo y ancho del país¹⁵.

Algunas candidaturas apoyadas por los partidos políticos cuestionados por sus nexos con los paramilitares obtuvieron la victoria. Es el caso del candidato a la gobernación del Magdalena, Omar Díazgranados, apoyado desde la cárcel de La Picota, o de Martha del Socorro Sáenz, quien ganó la Gobernación de Córdoba gracias al apoyo que le brindó el congresista detenido Juan Manuel López Cabrales. Las elecciones a la gobernación del departamento de Sucre también fueron duramente cuestionadas por posible fraude electoral, luego de que, en principio, se diera como ganador al liberal Julio César Guerra Tulena y, posteriormente, el candidato por el partido de la U, Jorge Carlos Barraza Farak, apoyado por los parlamentarios presos Álvaro García y Jairo Merlano, triunfara por una diferencia de 889 votos¹⁶.

Los resultados de las elecciones para alcaldías también son preocupantes. Nuevamente Álvaro García demostró que sigue mandando en el departamento del Sucre, no sólo por la victoria de su candidato a la gobernación, sino, además, por el triunfo en la alcaldía de Sincelejo de Jesús Antonio Paternina, respaldado por su movimiento Colombia Viva. Resultan especialmente preocupantes los resultados de alcaldías de municipios como San Onofre (Sucre), donde ganó Edgar Benito Rebollo, candidato presuntamente apoyado por paramilitares¹⁷; Yalí (Antioquia), donde ganó Óscar Alonso Mira, paramilitar “desmovilizado” del Bloque Héroes de Granada, quien ya había sido alcalde del mismo municipio entre el 2001 y el 2003¹⁸; Sabanalarga (Casanare), donde la alcaldía quedó en manos de Juan Antonio Bernal Ramírez, quien se encuentra detenido desde el 15 de octubre de 2007 por concierto para delinquir debido a sus presuntos nexos con grupos paramilitares¹⁹; Campo de la Cruz (Atlántico), en donde resultó electo Carlos Gutiérrez Cotes, quien también se encuentra detenido presuntamente por ser miembro del grupo paramilitar “Los 40”²⁰; y Carepa (Antioquia)

¹⁴ Es el caso de Rafael Arturo Calderón, candidato a la gobernación del Cesar, apoyado desde La Picota, quien perdió las elecciones frente a Cristian Moreno, candidato que había sido vetado por los paramilitares en las elecciones de 2003; o el caso de Didier Alberto Tavera Amado, quien perdió la Gobernación del departamento de Santander frente al liberal Horacio Serpa y era apoyado por Luis Alberto Gil, senador investigado por sus presuntos nexos con paramilitares. Sin embargo, Convergencia Ciudadana, partido político fundado por este senador, ganó la gobernación del Amazonas. Ver, al respecto, diario *El Tiempo*, “Varias regiones les pasaron cuenta de cobro a los de la ‘parapolítica’”, 29 de octubre de 2007, pág. 1-3.

¹⁵ Claudia López, “Más violencia política en medio de mayor seguridad: otra paradoja de estas elecciones”, 24 de octubre de 2007, consultado en: www.semana.com

¹⁶ “Los magos de Sucre”, 2 de noviembre de 2007, consultado en: www.votebien.com

¹⁷ *El Universal*, “Campaña de Benitrevollo de San Onofre es ilegal”, 18 de julio de 2007, versión electrónica.

¹⁸ Diario *El Colombiano*, “Que me vean como Alcalde, no como paraco: Óscar Mira”, consultado en: www.elcolombiano.com.co

¹⁹ Diario *El Tiempo*, “Varias regiones les pasaron cuenta de cobro a los de la ‘parapolítica’”, 29 de octubre de 2007, pág. 1-3.

²⁰ Diario *El Tiempo* “Trece elegidos, con líos con la justicia”, 30 de octubre de 2007, pág. 1-4.

donde, como se mencionó anteriormente, ganó Arnulfo Peñuela, señalado por alias “HH” de dirigir una convivir paramilitar.

Los resultados de quienes ganaron en algunos departamentos y municipios ilustran cómo el paramilitarismo se tomó nuevamente parte importante del poder político local del país. Sin embargo, esta situación puede ser vista a mayor escala si se analizan los resultados de las elecciones teniendo en cuenta los partidos políticos que resultaron ganadores.

Los partidos políticos de la coalición de Gobierno, que en su mayoría están involucrados en la investigación que organismos judiciales están adelantando contra algunos de sus miembros, resultaron, en conjunto, ser los ganadores de la contienda electoral. De estos, los más perjudicados por las investigaciones, si bien perdieron en las ciudades capitales, ganaron bastantes alcaldías municipales, copando una gran porción del territorio nacional.

En efecto, el movimiento Alas-Equipo Colombia obtuvo una gobernación y 83 alcaldías; Apertura Liberal obtuvo 37 alcaldías; el movimiento Colombia Viva obtuvo 13 alcaldías; Colombia Democrática, por su parte, consiguió llegar a 34 alcaldías; y Convergencia Ciudadana obtuvo 72 alcaldías y una gobernación²¹.

Si se analizan estos resultados frente a los obtenidos en las elecciones de 2003, se tiene que algunos de estos partidos han venido en crecimiento y que están en proceso de consolidación. El movimiento Convergencia Ciudadana, por ejemplo, pasó de 21 alcaldes en el 2003 a 72 en estas elecciones y se mantuvo en una gobernación en cada período. El movimiento Apertura Liberal, por su lado, pasó de tener 24 a 37 alcaldías; Alas-Equipo Colombia aumentó su presencia en 15 alcaldías al pasar de 68 a 83; el movimiento Colombia Democrática pasó de 35 alcaldías en el 2003 a 34 en la última jornada electoral; y el movimiento Colombia Viva pasó de tener 27 a tener 13 alcaldías²², un número que sin embargo no es desdeñable.

Las cifras demuestran en conjunto que hay una tendencia a la consolidación nacional de los partidos políticos que han sido cuestionados por sus nexos con los grupos paramilitares en lugar de una disminución de su presencia, y que, incluso, se evidencia una expansión territorial demostrada en la obtención de un alto número de alcaldías municipales. Los anteriores elementos permiten afirmar que, sin lugar a dudas, el paramilitarismo continúa siendo un actor que interviene en política y que ejerce fuerte presión en las elecciones, pues el mapa político local que regirá los próximos cuatro años continuará, en gran parte, influenciado por actores ajenos a la democracia.

Urge garantizar transparencia electoral

Las elecciones del 28 de octubre se caracterizaron por la falta de transparencia desde un comienzo, pues innumerables riesgos amenazaban con turbar el orden democrático. Muchos fueron los cuestionamientos que tanto la sociedad civil como instituciones del Estado hicieron sobre la pasada jornada electoral. Estas elecciones estuvieron marcadas por las alertas sobre fraudes electorales y por los hechos de violencia que tuvieron lugar contra diversos candidatos en diferentes regiones del

²¹ Consultado en: www.registraduria.gov.co

²² Ver al respecto, Claudia López, “Más violencia política en medio de mayor seguridad: otra paradoja de estas elecciones”, 24 de octubre de 2007, consultado en: www.semana.com

país. La Misión de Observación Electoral (MOE)²³ reportó 151 hechos de violencia atribuibles tanto a grupos guerrilleros como a grupos paramilitares, entre los que se cuentan 29 homicidios, ocho secuestros, 23 atentados y 91 amenazas contra los candidatos²⁴. Así mismo, esta organización advirtió sobre el riesgo en el que se encontraban 576 municipios del país por la influencia de actores armados²⁵. Si a esto se le suma la alerta sobre el apoyo del paramilitarismo -supuestamente desmantelado- a varios candidatos, podemos ver que el panorama previo a la jornada electoral no era muy alentador.

Ante estas amenazas, el Gobierno respondió, en gran parte, con la destinación de un mayor número de miembros de la fuerza pública para custodiar las elecciones²⁶. Sin embargo, mayor fuerza pública no implica mayor libertad y seguridad para los votantes. Si bien la jornada electoral transcurrió en aparente calma y sin mayores “alteraciones del orden público”, no es menos cierto que, para que la fuerza pública sea garante de la seguridad en las jornadas electorales, se requeriría, como primera medida, romper los nexos entre los grupos paramilitares y miembros de la fuerza pública. Además, en lo que se refiere a los grupos paramilitares, la estrategia para ejercer presión sobre los votantes no consiste sólo en la presión armada, y estas elecciones son claro ejemplo de ello. Para apoderarse del poder político local y nacional, los paramilitares han recurrido a diversas estrategias que van desde la financiación hasta el fraude electoral, todo lo cual no encuentra una respuesta satisfactoria en el aumento de miembros de la fuerza pública para cubrir los comicios.

En conclusión, las elecciones del 28 de octubre no fueron, como lo anunció y como lo esperaba el Gobierno, “las más transparentes en la historia colombiana”²⁷. Si algo se transparente en ellas es la influencia de intereses criminales que afectan gravemente la vigencia de la democracia en Colombia. ¿Qué ocurriría, por ejemplo, si los miles de votos fraudulentos obtenidos por candidatos apoyados y financiados por los paramilitares fueran descontados del total de la votación obtenida para las elecciones de corporaciones públicas de nivel nacional y local? Muy seguramente el panorama político variaría considerablemente, pues el umbral para acceder a las curules, en el caso del Congreso de la República, se reduciría. Así, otros partidos políticos legítimos podrían acceder a curules que no pudieron obtener debido a que los resultados fueron alterados, con lo que las fuerzas políticas en el Congreso de la República podrían equilibrarse, lo cual incidiría de manera directa en las políticas públicas y en las leyes que debe aprobar el Congreso.

Tal como quedó configurado el mapa político, no se vislumbra entonces un cambio en el manejo del poder. Para ello se requeriría garantizar el deslinde entre políticos y grupos paramilitares. Quizás una reforma electoral que fije reglas de juego claras y transparentes permitiría una depuración de las corporaciones públicas que, tal y como se desprende de las investigaciones judiciales en curso, están profundamente penetradas por el paramilitarismo.

***Para mayor información, contactar a: Gustavo Gallón Giraldo, Director CCJ (Tel. 376 8200, ext. 115).
Bogotá, 27 de diciembre de 2007***

²³ La Misión de Observación Electoral (MOE) es una organización de la sociedad civil conformada por organizaciones no gubernamentales, universidades, organizaciones sociales, gremios, ciudadanas y ciudadanos, que tiene por finalidad observar que el proceso electoral se ajuste a los principios democráticos. Consultar en: www.moe.org.co

²⁴ Claudia López, “Más violencia política en medio de mayor seguridad: otra paradoja de estas elecciones”, 24 de octubre de 2007, consultado en: www.semana.com

²⁵ Ver, al respecto, Misión de Observación Electoral, “Retos electorales, riesgos y recomendaciones: elecciones octubre 28 de 2007”, Bogotá, octubre de 2007.

²⁶ Ver, entre otros, Boletín Ministerio del Interior y de Justicia, “Para garantizar unas elecciones transparentes 77 mil efectivos adicionales de la policía y 107 mil del Ejército reforzarán seguridad”, 27 de septiembre de 2007, consultar en: <http://www.mij.gov.co>

²⁷ *Ibid.*